

REPÚBLICA DE COLOMBIA



SALA CUARTA DE DECISIÓN LABORAL

PROCESO	ORDINARIO
DEMANDANTE	Juan José Posada Velásquez
DEMANDADO	Colfondos S.A. y Junta Nacional de Calificación de Invalidez
PROCEDENCIA	Juzgado 19 Laboral del Cto. de Medellín
RADICADO	05001 3105 <b>019 2017 00839</b> 01
INSTANCIA	Segunda
PROVIDENCIA	Sentencia Nro. 050 de 2023
TEMAS Y SUBTEMAS	Pensión de invalidez de origen común – No acredita PCL igual o superior al 50%
DECISIÓN	Confirma absolución

En la fecha, **veinticuatro (24) de marzo de dos mil veintitrés (2023)**, el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Medellín, Sala Cuarta de Decisión Laboral integrada por las magistradas: María Eugenia Gómez Velásquez, Claudia Angélica Martínez Castillo y como ponente, Luz Amparo Gómez Aristizábal, procede a emitir pronunciamiento con relación al recurso de apelación formulado por el apoderado del señor **Juan José Posada Velásquez**, frente a la sentencia proferida por el Juzgado Diecinueve Laboral del Circuito, dentro del proceso ordinario que promoviera este en contra de **la AFP Colfondos S.A., y de la Junta Nacional de Calificación de Invalidez**. Radicado único nacional 05001 3105 **019 2017 00839** 01.

**Auto:** en los términos de la documentación enviada vía correo electrónico, se procede a reconocerle personería jurídica al Doctor Esteban Aguirre Henao, para que continúe representando los intereses del demandante.

La Magistrada ponente, en acatamiento de lo previsto en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, sometió a consideración de las restantes integrantes

el proyecto, estudiado, discutido y aprobado mediante acta **Nº 006**, que se adopta como sentencia y se plasma a continuación:

## **Antecedentes**

El demandante convocó a juicio a las accionadas pretendiendo se declare la nulidad del dictamen emitido por la Junta Nacional de Calificación de Invalidez; en consecuencia, se establezca que cuenta con una PCL del 57,13% de origen común, estructurada el 27 de febrero de 2015, y con ello se condene a Colfondos a reconocerle y pagarle pensión de invalidez, indexación o intereses moratorios, y costas del proceso.

En sustento de ello afirma que, cuenta con 60 años y con antecedentes y diagnóstico de VIH desde el 2001, razón por la cual fue calificado el 17 de agosto de 2015, por Colfondos con una PCL del 27,20% estructurada el 27 de febrero del mismo año. Que con posterioridad fue nuevamente evaluado por la Junta Regional de Calificación de Invalidez, quien le determinó una PCL del 44,50%, estructurada el 27 de febrero de 2015, decisión frente a la cual interpuso recurso de apelación, siendo desatado por la Junta Nacional de Calificación el 14 de abril de 2016, confirmando la conclusión a la que llegó la Junta Regional, en tanto, omitió valorar el HIV estadio 3, hipertensión en tratamiento, liquen plano dermatitis en estudio e hipoacusia neurosensorial bilateral, motivo por el cual se sometió a una nueva valoración, por médico particular dr. Luis Armando Cambas, el 15 de noviembre de 2016, en la que se estableció que cuenta con una PCL del 57,13% estructurada el 27 de febrero de 2015, encontrándose con ello acreditados los requisitos para el reconocimiento de la pensión de invalidez.

En auto del **26 de octubre de 2017, se admitió** y ordenó dar trámite a la acción, una vez enteradas las demandadas de la existencia del proceso, procedieron a allegar contestación, así:

**Colfondos S.A.**, admite la edad del actor, el diagnóstico que presenta, así como el contenido del dictamen emitido por el fondo y por la Junta Regional y Nacional de Calificación de Invalidez, frente a los restantes supuestos manifiesta que no son hechos y que no le constan, exponiendo que la experticia emitida por el tercero no ha sido conocida por la entidad, adicional a que no se trata de una autoridad competente para determinar la PCL, por lo que debe ser sometido a debate. **Resistió las pretensiones incoadas**, formulando excepciones de mérito tendientes a enérgalas, tales como, inexistencia del derecho a la pensión de invalidez, prescripción, compensación, pago y, la genérica o innominada.

**La Junta Nacional de Calificación de Invalidez**, acepta la edad del actor, el contenido de los dictámenes emitidos por Colfondos, la Junta Regional y la entidad, los demás supuestos no son ciertos o no le constan. **Se atiene a lo que se declare probado dentro del proceso**, no obstante, manifiesta en su defensa que únicamente calificó el diagnóstico denominado enfermedad por VIH, resultante en padecimientos múltiples clasificadas en otra parte, confirmando el porcentaje de pérdida de la capacidad laboral asignado por la Junta Regional, por encontrarse ajustado a la normatividad vigente, esto es, 44.50%, con fecha de estructuración el día 27 de febrero de 2015, decisión emitida por los profesionales de la entidad que se encuentra soportada en los lineamientos del Decreto 1507 de 2014 (Manual Único par a la Calificación de la Pérdida de la Capacidad Laboral y Ocupacional), y en cuanto al procedimiento con el Decreto 1352 de 2013 unificado por el Decreto 1072 de 2015, con base en un análisis concienzudo de la historia clínica aportada al proceso y de la valoración médica practicada. Por último, presentó como excepciones de mérito las que denominó: legalidad de la calificación emitida por la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, la variación en la condición clínica del paciente con posterioridad al dictamen exime de responsabilidad a la entidad,

improcedencia de las pretensiones respecto a la Junta Nacional, buena fe y, la genérica.

La primera instancia **terminó con sentencia** proferida por el Juzgado Diecinueve Laboral del Circuito de Medellín, en la que absolvió a Colfondos y la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, de las pretensiones incoadas en su contra. Declaró probada la excepción de inexistencia de la obligación e impuso costas a cargo del actor, fijando las agencias en derecho en la suma de \$300.000,00 correspondiéndole un 50% a cada demandada.

Argumentó el juzgador que la cercanía del abogado de la parte actora, con el médico perito calificador, Luis Armando Cambas, ameritaba un análisis más riguroso del dictamen aportado, por lo que al realizar un estudio de cada uno de los diagnósticos tenidos en cuenta por dicho evaluador, concatenados con el resto de dictámenes aportados, concluyó que este, no tenía la fuerza probatoria suficiente para desvirtuar o señalar errores que lleven a establecer una PCL superior al 50%, como lo pretende la parte actora, más aun cuando por ejemplo el Doctor Cambas, informa que aparecen elementos nuevos que no existían o no estaban presentes en la evaluación de las Juntas, al darse con posterioridad al 2016, los cuales implicaban modificación o llamados de atención de cara a la calificación, circunstancias, que según fue expuesto, no tienen afectación o incidencia al momento de determinar una PCL, aun cuando si son relevantes en la valoración, supuesto que le resta certeza al dictamen, y no da lugar a declarar la nulidad de los aportados.

Inconforme con la anterior decisión el apoderado de la parte actora **interpuso recurso de apelación**, para ello, en síntesis, solicita que se revoque la sentencia, en tanto, el análisis realizado por el juez de instancia se limitó única y exclusivamente a hacer una comparación entre los

dictámenes proferidos y el del Dr. Cambas, desconociendo la realidad material que se desprende de las consideraciones de hecho y derecho que se han acreditado dentro del presente proceso, cuya primera fuente privilegiada es la historia clínica, adicional a que se realiza el análisis para la situación para el 2015, ignorándose los diagnósticos, tratamientos médicos y, el carácter progresivo e incurable de las patologías que presenta, lo cual le ha impedido seguir laborando. Pide se analice de manera conjunta y a la luz del principio de la sana crítica, el material probatorio aportado o solicitar prueba de oficio a fin de que se analice con detenimiento la historia clínica y la evolución de las patologías.

En orden a decidir, basten las siguientes,

### **Consideraciones**

Como hechos debidamente acreditados en los autos, no discutidos y que se tornan relevantes para resolver se tienen: que el señor Juan Posada **nació el 30 de abril de 1956**, siendo calificado por Colfondos el **17 de agosto de 2015**, con una **pérdida de capacidad laboral del 27,20% estructurada el 27 de febrero de 2015**, decisión frente a la cual se mostró en desacuerdo y por ello, el 25 de noviembre de 2015, fue valorado por la **Junta Regional de Calificación de Invalidez**, quien le determinó una **PCL 45,50% estructurada el 25 de febrero de 2015**, por el diagnóstico de infección por HIV, dictamen que fue objeto de apelación por el actor y por ello conocido por la **Junta Nacional de Calificación de Invalidez, 14 de abril de 2016, confirmando la decisión objeto de revisión**. Al trámite se allegó **experticia del 15 de noviembre de 2016, emitida por el Doctor Luis Armando Cambas Zuluaga**, quien estableció que el demandante presenta una **PCL del 57,13% estructurada el 27 de febrero de 2015**, por los diagnósticos de: HIV estadio 3 hace 15 años, HTA en tratamiento hace 3 años, sarcoma de

Kaposi, liquen plano, gota episodio 3 a 4 desde el 2001 el primer episodio, dermatitis en estudio, sintomático respiratorio, arritmia supraventricular en estudio, HNS moderada bilateral, deterioro cognitivo leve. De manera oficiosa esta Sala dispuso la valoración del actor, por parte del **CENDES**, entidad que **estableció que presenta una PCL del 37,68% estructurada el 27 de febrero de 2015, con una deficiencia global ponderada del 27,68%.** Considerándose como diagnósticos: VIH Sida Clase 3, Hipertensión arterial clase 1, Hipoacusia neurosensorial bilateral leve a moderada, Liquen plano en resolución.

Conforme a lo anterior, **el problema jurídico** se circunscribe a establecer la eficacia probatoria del dictamen aportado con la demanda, respecto a los practicados por Colpensiones, la Junta Regional y Nacional de Calificación de Invalidez y el decretado de manera oficiosa, a fin de determinar si al demandante le asiste derecho al reconocimiento y pago de la pensión de invalidez.

Pues bien, debe decirse que la Corte Constitucional, entre otras, en la Sentencia T-873 de 2013 ha considerado la calificación de la pérdida de capacidad laboral como un derecho que tiene toda persona, el cual cobra gran importancia al ser el medio para la realización efectiva de otras garantías fundamentales como la salud, la seguridad social y el mínimo vital, en tanto que permite determinar a qué tipo de prestaciones tiene derecho el afectado por una enfermedad o accidente, producido con ocasión o como consecuencia de la actividad laboral, o por causas de origen común.

Así, atendiendo la Jurisprudencia Constitucional, la calificación de la pérdida de capacidad laboral debe considerar las condiciones específicas de cada persona, valoradas sistemáticamente, dicha valoración puede tener lugar no solo como consecuencia directa de una enfermedad o accidente de trabajo, claramente identificado, sino también, de patologías que

resulten de la evolución posterior de esta enfermedad o accidente, o, a su vez, por una situación de salud, inclusive de origen común.

De la misma manera dicha corporación ha establecido reglas procedimentales básicas que rigen las actuaciones de las entidades encargadas de calificar la pérdida de capacidad laboral, y que conforman los contenidos mínimos del derecho fundamental al debido proceso en esta clase de trámites, encontrándose dentro de ellas: "ii) ***La valoración del estado de salud de la persona calificada debe ser completa e integral, pues las juntas deberán proceder a realizar el examen físico correspondiente, y al sustanciar y proferir el respectivo dictamen deben tener en cuenta todos los aspectos médicos consignados en la historia clínica y ocupacional del paciente***" (sentencias T 713 de 2014 y T 093 de 2016).

Ahora bien, el artículo 41 de la Ley 100 de 1993, determina que son las Juntas de Calificación de Invalidez, junto con Colpensiones, las EPS, las ARL y las compañías de seguros que asuman los riesgos de invalidez y muerte, las entidades responsables de establecer, con fundamento en criterios técnicos, médicos y científicos, el porcentaje de pérdida de capacidad laboral, el origen de la misma y su fecha de estructuración. No obstante lo señalado en esta disposición legal, ninguna duda queda que tales dictámenes pueden ser debatidos judicialmente, en tanto, es posible que dentro de un trámite ante la justicia ordinaria se puedan acreditar, por cualquier medio probatorio, los errores en que pudo haber incurrido una pericia, atendiendo que, en los juicios laborales, al tenor del artículo 51 del C.P.T., son admisibles todos los medios de prueba establecidos por la Ley (SL, 19 oct. 2006, rad. 29622, SL, 27 mar. 2007, rad. 27528, SL, 18 sep. 2012, rad. 35450, SL, 30 abr. 2013, rad. 44653, SL16374-2015, CSJ SL5280-2018, SL4571-2019, SL1958-2021 y SL5694-2021). De acuerdo con ello, las partes tienen libertad probatoria, pudiendo demostrar sus sustentos fácticos por el que les resulte más apropiado, teniendo como único límite los criterios de utilidad, conducencia y pertinencia de la prueba.

Esta controversia es posible, por cuanto dichas experticias *"no tienen la virtud de resolver de manera definitiva las controversias surgidas en torno al grado de invalidez ni de producir efectos de cosa juzgada"*, dado que ello solo ocurre con el ejercicio de la función jurisdiccional del Estado, que *"implica el desarrollo de una serie de actos procesales que culminan en la expedición de un acto final -la sentencia-, llamado a definir el punto controvertido con fuerza de verdad legal"* (SL1958-2021), por lo que para el caso sería una entidad diferente a la Junta Regional y Nacional de Calificación de Invalidez al haberse presentado inconformidad por parte del demandante frente a los dictámenes rendidos por las misma, la encargada de determinar la pérdida de capacidad laboral, pues así fue previsto por el propio legislador, siendo estos dictámenes los medios de convicción idóneos para determinar tanto el grado de pérdida de la capacidad laboral como la fecha de estructuración, *ítems* que, en principio se tienen como invariables, no por el hecho de que tales aspectos exijan una determinada solemnidad, que desde luego no la tienen, sino porque establecerlos requiere de unos conocimientos técnicos y científicos de los que carece el operador judicial, razón por la cual el legislador, se insiste, los difirió a organismos especializados en el tema.

Sobre la revisión de la pérdida de capacidad laboral, atendiendo a que la invalidez es un criterio susceptible de progresividad o regresividad, pues con él se pretende determinar si una persona está o no materialmente en situación de invalidez, se ha pronunciado el órgano de cierre de la jurisdicción ordinaria laboral, indicando en la SL3008-2022, que:

*"es absolutamente factible que, dada la evolución de las patologías, la aparición de nuevos diagnósticos de un mismo origen o de una génesis diversa, pueda no solo determinarse en forma inicial un porcentaje de pérdida de capacidad laboral, sino también revisarse en el sistema de seguridad social o por vía judicial una calificación que ya está en firme o realizarse una calificación integral que incluya factores comunes y laborales, con el fin de dictaminar la situación material de invalidez de una persona, lo anterior, con las características propias que supone cada uno de estos trámites de calificación."*



Teniéndose establecido por la jurisprudencia especializada que cuando se controvierte un dictámen, el operador judicial está sujeto a tomar en su integridad el que de manera objetiva le de mayor credibilidad y certeza sobre los puntos debatidos, sin que pueda configurar uno propio a su acomodo, tomando datos de uno y otro, y dado, que para el caso el aportado por la parte, fue objeto de reparo por el juez de instancia, y frente a esta conclusión la parte demandante se mostró inconforme, fue que esta Sala procedió a decretar nueva prueba de oficio, para la calificación integral del demandante, la misma fue rendida por el Cendes, quien como ya se dijo en experticia **estableció que el actor presenta una PCL del 37,68% estructurada el 27 de febrero de 2015, con una deficiencia global ponderada del 27,68%.** Valorándose los diagnósticos de *VIH Sida Clase 3, Hipertensión arterial clase 1, Hipoacusia neurosensorial bilateral leve a moderada, Liquen plano en resolución*. Teniendo en cuenta para ello, examen médico general, aspecto físico, su estado neurológico, su esfera mental, las impresiones diagnósticas, la historia clínica, dejándose consignado como conclusión:

*"De acuerdo con el manual de calificación de invalidez vigente para este caso – Decreto 1507/2014, su historia clínica, los conceptos de los especialistas tratantes, los diferentes estudios de laboratorio clínico y de imágenes, los dictámenes previos, los elementos de hecho y de derecho, las normas técnicas de procedimiento, directrices del manual de calificación acorde con las capítulos y tablas respectivas, la valoración clínica realizada el pasado 25 de enero de 2023, el archivo de imágenes y videos que se aportan para este expediente, el señor Juan José Posada Velásquez, presenta una pérdida de capacidad laboral de 37,68%, que genera una incapacidad permanente parcial, con fecha de estructuración 27/02/2015 El origen común de todas sus patologías."*

Esclareciendo que:

*"la diferencia en porcentaje con el dictamen de la Junta Regional y Nacional de 6,82% radica básicamente en la calificación que hacen las Juntas en la valoración del rol laboral, tabla 1 del título II, toda vez que al contar para su momento con una edad de 59 años a fecha de 14/04/2016, le era aplicable dicho rol, así estuviera vacante. Con esta nueva valoración y en coherencia con sus 66 años de edad, le es aplicable por la norma que estableció los 62 años de edad, para el sexo masculino como edad para pensionarse, la tabla 14 del título II del manual de calificación (página 149 de 152 del decreto publicado en el*

*diario oficial)), que valora el rol ocupacional, de tiempo libre y esparcimiento en adultos mayores, a la cual se le asigna acorde con su realidad material y en respuesta al tratamiento antirretroviral para su patología principal (VIH/Sida) y en coherencia con su nivel de independencia actual, que permite asignarle 10% y no 19.50% por el Rol laboral y otros que tenía antes de los 62 años. La Valoración del perito particular Dr. Luis Armando Cambas, contiene elementos de sobrevaloración, para todas sus deficiencias/patologías en categorías más gravosas a las reales y no acordes con el historial clínico que se aportó con el expediente. Patologías o deficiencias por VIH, Sarcoma de Kaposi, Liquefacción, e hipertensión las cuales se hayan controladas bajo el tratamiento impartido, al cual, el señor Juan José, ha sido adherente y no ha tenido complicaciones en el tiempo que admitan asignar los porcentajes por el considerados. El déficit auditivo evidenciado no se corresponde con el valor asignado (sobrevalorado), acordes con las tablas 9.1 y 9.2 del capítulo 9 del manual de calificación – decreto 1507/2014.”*

Calificación que se encuentra acorde a las deficiencias baremadas, ofreciendo plena credibilidad a la Sala, y que en lugar de desvirtuar confirma las atacadas, realizadas por Colfondos y por la Junta Regional y Nacional de Calificación de Invalidez, quienes establecieron que el mismo cuenta con una PCL inferior al 50%, sumado a que se valoró de manera directa al actor, sin que sea posible modificar ninguno de los aspectos, no solo por carecer los juzgadores de los conocimientos técnicos para hacerlo, sino porque la jurisprudencia especializada es clara en indicar que:

*si en un proceso se encuentran enfrentados dos dictámenes, uno de la Junta Regional y otro de la Nacional, el juez del Trabajo y de la Seguridad Social, en virtud de la libertad probatoria prevista por el artículo 61 del CPTSS, está facultado para escoger lo establecido en el primero o en el segundo, e inclusive ordenar un tercero, pero el que acoja debe tomarlo en su integridad, esto es, no puede escindirlo y menos configurar uno nuevo con apartes de uno y otros,* así se explica en sentencia SL1021–2019 radicado 62309 del 27 de marzo de 2019

Así las cosas, al ser el medio de convicción anotado el idóneo para determinar tanto el grado de pérdida de la capacidad laboral como la fecha de estructuración, al haber sido emitido por organismos especializados en el tema y autorizados por el legislador, así como convalidar el experticio rendido por las entidades autorizadas por la ley para emitir los mismos, esto es las Juntas, y advertir que la ***evaluación del perito particular Dr. Luis Armando Cambas, contiene elementos de sobrevaloración, para todas sus***

***deficiencias/patologías en categorías más gravosas a las reales y no acordes con el historial clínico que se aportó con el expediente,*** se tienen las experticias objeto de revisión como invariables, pues, dichos conocimientos técnicos y científicos tienen que ser refutados por un medio igual, al carecer el operador judicial de ellos (ver sentencia SL1021-2019), y al desvirtuar estos las conclusiones del dictamen de parte, de manera objetiva y atendiendo los diagnósticos, historias y valoración del actor, lo procedente es confirmar la decisión de instancia.

Ahora, teniendo en cuenta que el dictamen decretado estableció que el actor presenta una **con una deficiencia global ponderada del 27,68%**, y que el párrafo 4° del artículo 9 de la Ley 797 de 2003, que modificó el artículo 33 de la ley 100 de 1993, consagra la **pensión especial de vejez** en favor de las personas que padezcan una deficiencia física, síquica o sensorial del 50% o más, quienes además deben cumplir con 55 años de edad y 1.000 o más semanas de cotización, pasa la Sala a determinar si el actor acredita los supuestos para el reconocimiento de este tipo de prestación, encontrando que si bien tiene una deficiencia superior al 50%, pues véase como en el dictamen se le asigna en este ítem 27,68%, esto es, supera el 25% al ser el máximo previsto por ley 50%, también lo es que no acredita la densidad de semanas necesaria, esto es, 1.000, pues, según historia laboral decretada de oficio por la Sala, **cuenta con 808,86 semanas**, razón por la cual no resulta dable aplicar los supuestos establecidos en las sentencias T-007-2009, T-201 de 2013 y T-462 de 2016, de la Corte Constitucional, y en las SL1037-2021, SL2681-2021, SL5163-2021, y SL2421-2022, para darle aplicación a lo establecido en el párrafo 4° del artículo 9 de la Ley 797 de 2003.

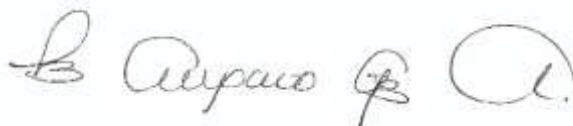
Costas en esta instancia a cargo del demandante y en favor de las demandadas. Inclúyanse como agencias en derecho la suma de \$200.000,00, dividida en partes iguales para cada una de las demandadas.

En mérito de lo expuesto, la **Sala Cuarta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial Medellín**, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, **Confirma** la sentencia proferida por el Juzgado Diecinueve Laboral del Circuito de esta ciudad dentro del proceso ordinario promovido por el señor **Juan José Posada Velásquez**, contra **Colfondos y la Junta Nacional de Calificación de Invalidez**.

Costas en ambas instancias a cargo del demandante y en favor de las demandadas. Inclúyanse como agencias en derecho la suma de \$200.000,00 dividida en partes iguales para cada una de las demandadas.

Lo resuelto se notifica a las partes por **EDICTO**, que se fijara por **secretaría por el término de un día**, en acatamiento a lo dispuesto por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en auto AL2550-2021.

**Las magistradas** (firmas escaneadas)



**LUZ AMPARO GÓMEZ ARITIZABAL**



**MARÍA EUGENIA GÓMEZ VELÁSQUEZ**



**CLAUDIA ANGÉLICA MARTÍNEZ CASTILLO**